Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

Las leyes y las disposiciones del Gobierno son obligatorias para la capital de provincia desde que se publican oficialmente en ellas y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 de Noviembre de 1837.)

SUSCRICION PARTICULAR.

Un mes en Córdoba.	12 rs.	Id fuera.	16
Tres id.	33		54
Seis id.	66		90
Un año.	132		180

Se publica todos los días excepto los Domingos

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales se han de remitir al Gefe político respectivo por cuyo conducto se pasarán á los editores de los mencionados periódicos. (Reales órdenes de 6 de Abril de 1839, y 31 de Octubre de 1854.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (q. D. g.) y su augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud.

EXPOSICION Á S. M.

SEÑORA:

El Gobierno de V. M., resuelto á restablecer el orden en todos los departamentos que á su direccion están sometidos, y como consecuencia de esto á extinguir el espíritu político que ha predominado con lamentable frecuencia en la provision de los empleos, perturbando la gestion de los intereses del Estado y originando en muchas ocasiones disturbios graves en la sociedad, ha considerado que debia preparar los trabajos indispensables para ofrecer á la deliberacion de las Cortes en la próxima legislatura un proyecto de ley cuyo fin sea fijar los principios, reglas y condiciones que deban observarse y exigirse en lo tocante á la entrada, permanencia y ascensos de los que se dedican al servicio del Estado en las diferentes carreras de la Administracion pública. Hace mucho tiempo que la atencion general se ha fijado sobre este asunto, y cada dia es mayor el empeño con que de él se habla en todas partes. La maledicencia exagera sin duda las proporciones del mal que se trata de corregir; pero el mal existe indudablemente y sus efectos se sienten por desgracia con alguna fuerza, ya en el orden moral, ya en lo tocante á la representacion material de este en los gravámenes del presupuesto. Persuadidos los Consejeros responsables de V. M. de que este negocio exige una resolu-

cion pronta y eficaz, contrajeron el compromiso ante las Cortes de presentarla con toda premura, empleando para ello los medios que les facilita su poderosa iniciativa. Para realizar aquella obligacion solemne, para satisfacer una de las primeras necesidades del orden en lo político y en lo social, y á fin de que en lo posible el proyecto de ley sobre esta materia reuna todos los elementos de eficacia de que debe estar revestido un trabajo tan importante, el que suscribe, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobacion de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 1867.-- Señora.--A L. R. P. de V. M.--El Duque de Valencia.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Presidente de mi consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea una Junta que teniendo á la vista todos los antecedentes que existan en las diversas Secretarías del despacho, formule, con la urgencia que debe esperarse del celo de los individuos que la compongan un proyecto de ley que organice definitivamente todas las carreras civiles de la Administracion pública.

Art. 2.º Compondrán esta Junta un funcionario, Jefe de Administracion, designado por cada uno de los diferentes departamentos ministeriales.

Art. 3.º El de mayor categoria entre los elegidos hará las veces de Presidente, y el que la disfrute menor y tuviese menos antigüedad en su empleo las de Secretario.

En el caso de que pertenezcan todos á la misma categoria, el más

antiguo llenará las funciones del primero y el más moderno las del segundo.

Art. 4.º Por los Ministerios respectivos se dictarán las disposiciones oportunas para la ejecucion del presente decreto.

Dado en San Ildefonso á veintisiete de Julio de mil ochocientos sesenta y siete. -- Está rubricado de la Real mano. El Presidente del Consejo de Ministros, Ramon María Narvaez.

REALES DECRETOS.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Albacete y el Juez de primera instancia de Chinchilla, de los cuales resulta:

Que en 26 de Marzo de 1866 acordó el Ayuntamiento de Pozohondo conceder á Pedro Nuñez 350 varas del solar que existia en terreno realengo en la Nava de Abajo, frente á la casa del mismo Nuñez, como este le habia solicitado para hacer un parador y ensanchar su casa:

Que en 18 de Junio siguiente se presentó al Juzgado de Chinchilla un interdicto de recobrar á nombre de doña Josefa Nuñez Robres contra Pedro Nuñez por haberla despojado hacia unos dos meses de la posesion de un bancale de la labor llamada Pozo-Rubio, que la querellante habia heredado de su marido D. Lino Andrés, echando cimientos y levantando paredes en aquel terreno para hacer una casa:

Que recibida informacion testimonial y prestada fianza, acordó el Juez para mejor proveer que se reconociera la obra por peritos, y estos declararon que en el bancale llamado Pozo-Rubio, se habia levantado cuatro paredes de unas tres varas de altura,

que contenian 656 varas cuadradas de terreno; añadiendo que la obra era nueva y hecha dentro de los siete ú ocho meses anteriores:

Que el Juez, suponiendo que procedia un interdicto de obra nueva, declaró no haber lugar al de recobrar, sentencia que revocó la Audiencia de Albacete en virtud de la apelacion que sostuvo la querellante.

Que hecha la tasacion de costas y ántes de que se ejecutara la restitution, el Gobernador de la provincia, á instancia del Ayuntamiento, y después de varios informes de este y del Consejo provincial, requirió de inhibicion al Juzgado, fundándose en los números 1.º y 4.º del art. 83 de la ley de Ayuntamientos y en la Real orden de 8 de Mayo de 1839.

Que el Juez sostuvo su competencia después de sustanciar el artículo en atencion á que el terreno era de propiedad particular, segun lo que de autos resultaba; y en la suposicion de que fuera comunal se excedió el Ayuntamiento de sus atribuciones al enajenarlo sin la aprobacion del Gobernador; á que, en el mismo supuesto de ser el terreno comunal, no se pudo enajenar por estar los de aprovechamiento comun exceptuados por las leyes de desamortizacion, ni se pudo conceder como roturacion porque no se pueden legitimar las hechas en los egidos de los pueblos y á que siendo la concesion hecha al despojante de 359 varas, y habiendo ocupado 656 del bancale de la despojada, es notorio que habia usurpacion de un derecho real de ajena pertenencia:

Que el Gobernador insistió en su requerimiento, de acuerdo con el Consejo provincial, resultando el presente conflicto que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 83 de la ley de Ayuntamientos, reformada en 21 de

Octubre de 1866, segun el cual los Ayuntamientos deliberan conformándose á las leyes y reglamentos:

1.º Sobre la formacion de las ordenanzas municipales y reglamentos de policia urbana y rural:

4.º Sobre la formacion y alineacion de las calles, pasadizos y plazas.

5.º Sobre la enajenacion de bienes muebles é inmuebles y sus adquisiciones, redencion de censos, préstamos y transacciones de cualquiera especie que tuviere que hacer el comun:

Vista la Real órden de 8 de Mayo de 1839; que prohíbe dejar sin efecto por medio de interdictos las providencias que dicten los ayuntamientos en los negocios que pertenecen á sus atribuciones segun las leyes:

Considerando:

1.º Que la provincia administrativa que se supone contrariada por el interdicto no concedió todo el terreno que ha ocupado el concesionario, ni pudo referirse á terrenos de propiedad privada ó poseido por un particular:

2.º Que el interdicto solo se dirige á obtener el amparo de la posesion que existe á favor de un particular, y por consiguiente en nada se opone al acuerdo del Ayuntamiento, haya ó no recaido este sobre materia administrativa y háyase ó no dictado en virtud de legítimas atribuciones:

3.º Que la cuestion promovida por el interdicto en nada afecta á los intereses públicos, y por el contrario, se limita á derechos y actos puramente privados;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en San Ildefonso á 21 de Julio de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Ramon María Narvaez.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Guadalajara y el Juez de primera instancia de Tamajon, de los cuales resulta:

Que en 6 de Julio de 1866 se presentó en aquel Juzgado un interdicto de despojo á nombre de don Segundo Colmenares, dueño de los montes llamados Claros, en los pueblos de Colmenar de la Sierra y su anejo Cabida, El Vado, Cardoso, Peñalva y Bocigano, contra varios vecinos de Colmenar y Cabida, por haber rozado, sembrado y cortado árboles en los sitios llamados Huecos de las Medicinas, Balbugera, Frontal, Fuente-corrál, Pedrizas y Laderas de Cabida:

Que recibida informacion testifical y prestada fianza, se dictó auto restitutorio en 4 de Agosto siguiente, el cual no se pudo notificar á los des-

pojantes hasta 1.º y 3 de Setiembre, por haberse negado los del pueblo á recibir la notificacion y á servir de testigos para ella:

Que dos vecinos de Colmenar apelaron del auto restitutorio, pero sin representacion del Procurador, por lo cual acordó el Juez que se proveeria luego que pidieran con la direccion debida, lo cual no hicieron despues, y en 12 de Octubre se llevó á efecto la restitucion:

Que en 8 del mismo Octubre el Ingeniero de Montes del distrito pidió al Gobernador que se le facilitaran algunos documentos para el expediente que decia estar instruyendo sobre la posesion de los montes llamados Claros, y esta Autoridad acordó entre otras cosas que se practicasen en cada pueblo informaciones que acreditaran la posesion de los montes, y sabedor de ello don Segundo Colmenares, pidió que se le oyerá y tuviera por parte en el expediente:

Que de los catastros de los pueblos, de los amillaramientos, de las informaciones practicadas por los Ayuntamientos y vecinos de los mismos y demás documentos que forman el expediente, aparece que los mencionados pueblos tenian montes en sus términos; que entre las haciendas de eclesiásticos solo habia en Colmenar, en el catastro de 1753, una tierra de seis celemines, perteneciente al Cardenal Portocarrero, Marqués de Montes Claros, Señor de la villa de Colmenar y sus barrios, de quien traia su derecho D. Segundo Colmenares; y que así este como el Duque de Híjar, á quien habia comprado los montes en 1862, no figuraban en los amillaramientos de 1853, 1859 y 1863, con fincas en Colmenar de la Sierra:

Que en vista del expediente, y de conformidad con lo informado por el Consejo provincial, acordó el Gobernador en 14 de Febrero del presente año amparar á los referidos pueblos en el disfrute de los montes de sus términos que venian poseyendo, con inclusion de los cuarteles llamados Fuente-corrál y el Frontal, declarar en estado de deslinde los confinantes con los de D. Segundo Colmenares, y requerir de inhibicion al Juez de primera instancia de Tamajon, como lo hizo apoyándose en los artículos 76 y 82 de la ley de 1.º de Mayo de 1863, cita equivocada, pues debe ser art. 1.º de la ley de 24 de Mayo, y en el núm. 6.º del art. 10 de la de Gobiernos de provincia:

Que sustanciado el incidente de competencia, presentó el querellante con su escrito testimonio de varios documentos, de los que aparece:

1.º Que el Supremo Consejo de Castilla amparó al Duque de Híjar en Noviembre de 1825 en la posesion de sus montes y pastos en las villas de Colmenar de la Sierra, Vado y Car-

doso, lo que resistieron los pueblos y mandó ejecutar el Consejo en 26 de Abril de 1826:

2.º Que habiéndose alzado de esta y la anterior providencia los pueblos, se confirmaron una y otra por el mismo Consejo, y mandó llevarlas á efecto en 2 de Enero de 1830:

3.º Que en Mayo siguiente se puso en posesion al Duque, no sin que protestaran los Síndicos de El Vado y Colmenar:

4.º Que en 1857 los Ayuntamientos y mayores contribuyentes de El Vado, Colmenar, Peñalva, Bocigano y Cardoso celebraron una avenencia con el Duque ante el Gobernador de Guadalajara, de la cual se levantó acta, reconociendo en ella los cinco pueblos el derecho de propiedad del mismo Duque en los montes de su respectivo término, y tomando en arrendamiento sus pastos, leñas muertas y carbon de brezo por 10 años, que concluirían á fin de 1866, á razon de 7000 rs. vn. anuales, y encargándose los mismos pueblos del pago de las contribuciones:

5.º Que al formalizar los arrendamientos por escritura pública, ratificaron los pueblos el mismo reconocimiento y se obligaron á no hacer reclamacion alguna:

6.º Que en 19 de Mayo de 1862 compró D. Segundo Colmenares los montes, tierras, pastos y derechos de pesca que correspondian al Duque de Híjar en los mencionados pueblos, á todo riesgo y ventura, designándose en Colmenar de la Sierra y su anejo Cabida siete cuarteles llamados Valle de las Fuentes, Majada de las Vacas y la Pedregosa, las Pedrizas, los Huecos de las Medicinas, la Barbugera y las Povedas, el Chaparral de las Cabezuelas, la Hera de los Mozos y Laderas de Cabida:

Y 7.º Que con estos mismos nombres constaban los montes de Colmenar inscritos en el Registro de la Propiedad á favor de Colmenares é hipotecados á otras personas:

Que en vista de estos documentos y alegaciones el Juez se declaró competente, de acuerdo con el Promotor fiscal, fundándose en que el querellante habia justificado plenamente ser el dueño y poseedor de la finca en cuestion; en que no existia providencia alguna administrativa cuando se intentó ni cuando se falló el interdicto, y estaba fenecido cuando se suscitó la competencia, y en que se trataba de fincas de propiedad privada que poseia pacíficamente más del año y dia el demandante:

Que insistiendo en su requerimiento el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, resultó el presente conflicto:

Visto el art. 76 de la ley de Ayuntamientos reformada en 21 de Octubre de 1866, que en su número 2.º encarga al Alcalde como Administrador del pueblo procurar la con-

servacion de las fincas pertenecientes al comun:

Visto el art. 82 de la misma ley, que señala entre las atribuciones de los Ayuntamientos la de arreglo por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y reglamentos, el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechamientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente:

Visto el art. 1.º de la ley de 24 de Mayo de 1863, segun el cual son montes públicos los de los pueblos:

Visto el art. 17 del reglamento de 17 de Mayo de 1865, que confia á la Administracion el deslinde de todos los montes públicos:

Visto el art. 58 del reglamento de 25 de Setiembre del mismo año, que dice así: El Tribunal ó Juzgado requerido de inhibicion, luego que reciba el exhorto, suspenderá todo procedimiento en el asunto á que se refiera, mientras no se termine la contienda por desestimiento del Gobernador, ó por decision Mia, so pena de nulidad de cuanto despues se actuare:»

Considerando:

1.º Que no se trata ahora de averiguar los limites de los montes que posean los pueblos por donde confinen con los poseidos por el querellante, sino de que este se mantenga en la posesion que disfruta, y le niegan los pueblos en el hecho de no respetarla y de disputarle la propiedad:

2.º Que hallándose el querellante en posesion de los montes sobre que versa la cuestion, y no habiéndose adoptado antes del interdicto providencia alguna por la Administracion para conservar la posesion que pudieran tener los pueblos, no se puede estimar improcedente el recurso judicial del interdicto, que se limita á mantener la posesion privada:

3.º Que la providencia del Gobernador declarando los montes en estado de deslinde y amparando á los pueblos en su posesion es posterior á la querrela de despojo y tambien al fallo del interdicto, y aun causada por el mismo auto restitutorio; y así como las providencias administrativas que recaigan sobre materias de este orden no se pueden dejar sin efecto por medio de interdictos ante la Autoridad judicial, tampoco los interdictos se pueden contrariar ante la Administracion, como se ha pretendido en este caso por medio del acuerdo del Gobernador:

4.º Que si bien el deslinde de los montes públicos y los que con ellos confinen en todo ó parte corresponde á la Administracion, el fondo de la cuestion suscitada por los pueblos ante la misma Administracion versa sobre la propiedad y sobre la posesion como consecuencia suya, lo cual es privativo de los Tri-

bunales de justicia en los juicios plenarios correspondientes:

5.º Que en el estado actual del asunto la Autoridad administrativa no puede ejercer otras atribuciones legítimas que las de conservar la posesion en que se hallen los pueblos, corregir las usurpaciones recientes y fáciles de comprobar y deslindar los montes públicos, mientras no se suscite en forma ante la Autoridad judicial la cuestion de propiedad que los pueblos han promovido ante la Autoridad.

6.º Que suscita una cuestion de competencia y adoptar al mismo tiempo providencias en el asunto, es contrario á la disposicion del art. 58 del reglamento de 25 de Setiembre de 1863, que es igualmente aplicable á ámbos contendientes, porque el principio en que se funda es que desde el momento en que se pone en duda la jurisdiccion ó atribucion para entender de un asunto por la provocacion de la competencia, ninguna de las Autoridades que la cuestionan la tienen para proceder en él;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial, y lo acordado.

Dado en San Ildefonso á veintuno de Julio de mil ochocientos sesenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Ramon María Narvaez.

En el expediente y auto de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Burgos y el Juez de primera instancia de Briviesca, de los cuales resulta:

Que en 19 de Julio de 1866 Lorenzo Alonso, vecino de Carcedo de Bureba, en el partido judicial de Briviesca, presentó en el juzgado una denuncia contra el Alcalde, Teniente Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Carcedo, que contenia los extremos siguientes:

1.º Que el Alcalde habia exigido multas en metálico á varios vecinos del distrito y de fuera de él; que cobró un reparto individual de un escudo 800 milésimas á los vecinos de Arconada, uno de los pueblos que forman el Ayuntamiento, sin la competente autorizacion; que á un pobre de solemnidad exigió 23 celemines de trigo á pretexto de pagar al Cirujano y Albeitar, y que exigió derechos de consumos y recargos en doble cantidad de la que estaba autorizada por los repartos, sin rendir cuentas de su inversion.

2.º Que el Teniente Alcalde habia tambien exigido y cobrado á los vecinos de Carcedo doble cantidad

por el reparto de consumos y recargos, negándose á dar recibos á los contribuyentes, sin ingresar el importe en Depositaria:

Y 3.º Que el Secretario de la corporacion cometió el mismo abuso con los vecinos de Quintana Urria; advirtiendo que todas estas exacciones se hicieron al parecer, suponiendo falsamente la existencia de una orden del Gobernador de la provincia:

Que admitida la denuncia en el Juzgado de Briviesca, se practicaron las diligencias oportunas en averiguacion de los abusos denunciados, y pasada al Promotor fiscal expuso que se estaba en el caso de dirigir el procedimiento contra el Alcalde, Teniente y Secretario de Carcedo, á cuyo fin debia ponerse en conocimiento del Gobernador de la provincia, sin pedirle la autorizacion previa por tratarse de la persecucion de delitos expresamente exceptuados de la garantía:

Que el Juez, conformándose con el precedente dictámen, así lo hizo en 25 de Enero último; y el Gobernador en 13 de Febrero siguiente contestó quedar enterado, pero añadiendo que en atencion á no haberle sido posible examinar con detenimiento los antecedentes oportunos para formar juicio exacto de la naturaleza del asunto, se reservaba el derecho de reclamar en su dia el conocimiento del mismo, suscitando al efecto la competencia del caso si llegase á entenderla procedente:

Que dado conocimiento de la anterior comunicacion al Promotor fiscal, fué de dictámen que debia desestimarse como inoportuna y contraria á la ley la reserva pretendida por el Gobernador, puesto que habian trascurrido los 10 dias que esta Autoridad tuvo para haber pedido al Juzgado que ampliase su primera comunicacion, y no hay disposicion legal alguna que autorice tales reservas, mucho mas tratándose de un juicio criminal; por todo lo cual concluia pidiendo al Juzgado que se participase así al Gobierno sin suspender las actuaciones:

Que el Juez, de acuerdo con lo solicitado por el Promotor, manifestó el 19 de Febrero al Gobernador que continuaba procediendo contra los funcionarios aludidos anteriormente; y así trascurrieron dos meses, al cabo de los cuales, el Gobernador con audiencia del Consejo provincial, requirió de inhibicion al Juzgado, fundándose para ello en que el juicio criminal podia entrañar alguna cuestion previa de presupuestos ó de contabilidad, cuyo conocimiento incumbe á la Autoridad administrativa con arreglo á los artículos 107 y 108 de la ley de Ayuntamientos y al 83 de la de 25 de Setiembre de 1863:

Que el Juez, requerido en vista de lo expuesto nuevamente por el

Promotor fiscal y alegado por la presentacion del acusador privado, dió sentencia en la que declaraba no acceder á lo solicitado por el Gobernador, aceptando la competencia entablada por este y requiriéndole á su vez para que dejase expedita su jurisdiccion, todo fundado en que en la cuestion presente no se trata de otra cosa que de un juicio criminal contra tres empleados públicos por exacciones ilegales, que constituye un delito que debia ser perseguido y castigado libremente por el Juzgado:

Por último, que el Gobernador, de conformidad con lo informado por el Consejo provincial, no estimó suficientes las razones expuestas por el Juez é insistió en la contienda de competencia que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 54, núm. 1.º del reglamento para la ejecucion de la ley relativa al gobierno y administracion de las provincias, segun el cual los Gobernadores no podrán suscitarse contienda de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 10, núm. 8.º de la propia ley, por el que se declara innecesaria la autorizacion para procesar á los empleados públicos acusados de los delitos de exaccion ilegal y percepcion de multas en dinero:

Considerando:

1.º Que en el presente caso no se trata de una contienda de competencia, sino de la autorizacion para procesar al Alcalde, Teniente de Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Carcedo, acusados de los delitos de exacciones ilegales y percepcion de multas en dinero, cometidos en el ejercicio de sus cargos:

2.º Que al contestar el Gobernador que quedaba enterado de los procedimientos que el Juzgado estaba instruyendo, declinó implícitamente su competencia en el negocio, con arreglo al art. 42 del reglamento de 25 de Setiembre de 1863, siendo por tanto inadmisibile é inoportuna la reserva de provocar la competencia mas adelante:

3.º Que no solo no existe en el caso actual cuestion previa administrativa, como pretende el Gobernador, sino que al declarar la ley innecesaria la autorizacion para procesar á los empleados públicos por los delitos de que se ha hecho mencion, ha atribuido á los Jueces y Tribunales la facultad exclusiva de conocer en tales asuntos;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no ha debido suscitarse.

Dado en San Ildefonso á veintuno de Julio de mil ochocientos sesenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Ramon María Narvaez.

(Gaceta del 29 de Julio.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Telegrafos.—Negociado 6.º

Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de lo dispuesto por V. I. de acuerdo con la Junta superior facultativa, respecto á la necesidad de adquirir 30.000 aisladores del número 1; 6.000 del número 2, y 3, 680 de tensor fijo, se ha dignado resolver que por esa Direccion general se proceda al anuncio y celebracion de la correspondiente subasta para la adquisicion del citado material, con arreglo al pliego de condiciones aprobado al efecto.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1867.—Gonzalez Brabo.

Sr. Director general de Telégrafos.
(Gaceta del 9 de Agosto.)

Núm. 1679.

Escuela especial de Veterinaria de Córdoba.

La matrícula se abrirá en 1.º de Setiembre y durará hasta el 15 del mismo.

Para ser admitido como alumno se requiere:

1.º Haber cumplido 17 años de edad.

2.º Acreditar con la certificacion correspondiente el estudio de las materias que comprende la primera enseñanza superior y el de elementos de Algebra y Geometría, [de cuyas asignaturas sufrirán un exámen previo ante la Junta de Catedráticos de la Escuela.

3.º Saber herrar á la española, lo cual se acreditará tambien mediante exámen en la misma escuela.

4.º Presentar un atestado de buena conducta, certificacion de salud y robustez, y fé de bautismo.

Todos estos documentos deberán estar legalizados en debida forma.

La matrícula será personal; nadie podrá, á título de pariente ó encargado, presentarse para que se incluya en ella á ningun cursante.

Los derechos de matrícula son 100 reales, que se pagarán en dos plazos.

Córdoba 13 de Agosto de 1867.
—P. A., el secretario interino, Gabriel Bellido.